

contra el Juez que dictó este auto: que por tanto el C. Lino Nava que introdujo este nuevo amparo, se hizo acreedor á la pena que consigna el art. 16 de la ley citada.

Por estas consideraciones se declara: Que es de reformarse y se reforma la sentencia del inferior, y se decreta:

1º Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Pío Bermejillo, contra el embargo que practicó el director de Rentas del Estado de Morelos en las haciendas de su propiedad, llamadas San Vicente, Dolores y Chiconcuac.

2º Que se impone la multa de cien pesos al C. Lino Nava personalmente, y no como Director de Rentas del Estado de Morelos, por haber interpuesto amparo contra el acto de suspension decretado en el principal.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. —*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 1º de 1874.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz por el C. Pablo Hernandez, contra los procedimientos de la Comandancia militar, en virtud de los cuales fué reducido á prision por sospechas de haber promovido la desercion entre varios soldados del Batallon número 3.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Pablo Hernandez, solicita amparo y proteccion de la Justicia federal, contra el procedimiento del C. Coronel del Batallon 3º de infantería que lo redujo á prision, con pretexto de que se habia hecho sospechoso, pidiendo al mismo tiempo la suspension del acto reclamado que le fué denegada, por las razones que se expresan en providencia de 25 de Abril último, y habiéndose pedido en seguida el informe justificado que la ley previene, al expresado C. Coronel, lo emitió contrariando los hechos que se relacionan en el ocurno y explicando los motivos que tuvo para haber concebido sospechas contra el quejoso, que estaba induciendo á la tropa á que hiciera algo que ignoraba el informante, por lo que se recibió á prueba este juicio, resultando de las declaraciones tomadas á los soldados con quienes habló en el cuartel el C. Hernandez, que no se les aconsejó la comision de ningun delito, ni siquiera que usaran del derecho de pedir amparo, negándose á defender al que le suplicó que lo patrocinara, no habiendo tenido participio alguno en la desercion del soldado que cita en su informe el C. Comandante militar, y que las veces que concurrió al expresado cuartel, se limitó á tomar instrucciones de sus defendidos, José Dávila, José Dolores Pasten y Ramon Sanchez, para producir pruebas en su favor, en el juicio de amparo que tenian promovido, y á leerles los escri-

tos que presentaba al Juzgado de Distrito y las cartas que recibía de sus familias como á encargado expresamente por ellos para defenderlos.

En tal concepto, es claro que no ha habido motivo legal para proceder criminalmente contra el C. Pablo Hernandez, y menos para reducirlo á prision inutilizándolo para el desempeño del encargo que tenía de representar y defender á los ciudadanos indicados, con violacion de las garantías que expresa en su ocursio.

Por cuyos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, pido á V. se sirva amparar al quejoso, contra la Orden de prision dictada respecto de él y ulterior procedimiento militar, por no ser arreglado á derecho.

Hercóica Veracruz, Mayo 20 de 1874.—  
*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Hercóica Veracruz, Junio 16 de 1874.—  
Vistos estos autos promovidos por el C. Lic. Clemente Calero, en representacion del C. Pablo Hernandez, pidiendo amparo contra los procedimientos á que lo ha sugetado la Comandancia militar de esta plaza, por sospechas de haber procurado la desercion entre varios soldados del Batallon número 3 y de haberlos inducido así mismo á otros fines, que segun el sentir del Gefé del Cuerpo y el de la misma Comandancia, se contraian á sedicion. Visto el informe de dicho Gefé, de que resulta: que habiéndose permitido á Hernandez la entrada al cuartel del mismo Batallon para que hablase con un soldado amigo suyo, concurría allí con frecuencia y dió motivo con su conducta á que se supusiese que seducía á la tropa, segun queda expuesto antes, por lo que se determinó su arresto en el propio cuartel; en cuyo estado no obstante, se creyó que insistía en sembrar la desmoralizacion en el Cuerpo, corroborándose esas sospechas con

la evasion del soldado Nicanor Santos. Vistas las pruebas rendidas por el quejoso para vindicarse de las imputaciones de que se hace mérito; lo alegado por él mismo para definitiva; lo pedido por el C. Promotor fiscal y demas constancias de autos.

Considerando: que de las probanzas aducidas resulta: que Hernandez en su concurrencia al cuartel del Batallon número 3, tenia por objeto único, satisfacer la necesidad de hablar con José Dávila, Dolores Pasten y Ramon Sanchez de quienes era defensor en un juicio que intentaron en solicitud de amparo ante este Juzgado por el destino que arbitrariamente se les dió en el servicio de las armas, y de ningun modo provocar á la tropa á la desercion ni menos inducirla á rebelarse ó cometer otro mal de esta clase, todo lo cual se acredita con las disposiciones de los mismos individuos y las de los demas soldados con quienes aquel conversó algunas veces; pues todos contestes declaran que nunca se ocupó con ellos ni con otras personas, de cosa que no se concretase á su interes particular.

Que si las providencias de que se queja Hernandez, han sido procedentes en razon de que habiéndose hecho sospechoso, con datos mas ó menos fundados, de un dañado intento, estaba en el caso de que se le asegurase precautoriamente como se verificó por Orden del Gefé del Cuerpo, y que se procediese á la inquisicion de los hechos, no se deduce aquí la competencia de la Comandancia militar para enjuiciar al referido, porque ora se le considere responsable de la desercion, ora de la sedicion á que se dice inducía, ó bien de ambos delitos á la vez, la autoridad competente para juzgarlo es el Juez ordinario, y así está dispuesto en la ley de 12 de Junio de 1857, que tratando de los auxiliadores de la desercion dice: que las justicias naturales de que estos dependan, instruirán el sumario ó impondrán la pena, salvo que el delito se cometa en plaza sitiada ó al frente del enemigo, en cuyo caso incumbe á la autoridad militar el

procedimiento, y en la de 6 de Diciembre de 1856, que con respecto á la sedición dispone, que la Justicia federal sustancie y determine en la causa.

Que los delitos de que se ha hecho referencia, en ninguna manera puede decirse que están comprendidos en la salvedad de la dicha ley de 12 de Junio de 57, ni tampoco lo están en la de 15 de Setiembre del propio año, que clasifican los delitos del orden militar; y esto así, no hay razón para que la Comandancia de la plaza los juzgue, y de haberlo hecho, se han violado en la persona del quejoso las garantías que reclama, que son las otorgadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución general.

Que sin embargo que de autos consta que la prisión decretada contra Hernandez ha cesado ya por haber cesado también la Comandancia militar en sus procedimientos, poniendo en libertad al quejoso, en cuya virtud este Juzgado, sin encontrar materia ni objeto para el amparo, se determinaba á sobreseer, se vé en el caso de continuar y decidir el recurso; pues del informe que se pidió á la Comandancia acerca de esos hechos, resulta que esa autoridad ha consignado en la sumaria la reserva de continuar sus providencias en espera de otros datos, cuya reserva apremia á Hernandez, por lo que este, con fundamento, ha pedido la formal resolución del amparo.

Por todas estas consideraciones y fundamentos, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitución general y ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez definitivamente juzgando, falla: la Justicia federal ampara y protege al C. Pablo Hernandez, contra los procedimientos de la Comandancia militar de esta plaza por los motivos que se han referido. Notifíquese; sáquense las copias prevenidas por la ley y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Así lo pronunció y firma el C. Juez primer suplente de Distrito. Daños 16.—*P. Mendizabal Ortiz.*—De asistencia.—

TOMO VI.—PARTE II.

*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia sacada fielmente de sus originales; lo certifico. Heroica Veracruz, 19 de Junio de 1874.—*P. Mendizabal Ortiz.*—De asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 20 de Junio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz por el C. Pablo Hernandez, contra los procedimientos de la Comandancia militar, en virtud de los cuales fué reducido á prisión por sospechas de haber promovido la desercion entre varios soldados del Batallon número 3. Visto lo probado y alegado por el quejoso; el pedimento fiscal, y la sentencia del Juez de Distrito.

Considerando: que acusado Hernandez de provocar la desercion entre los soldados del Batallon número 3, y de incitarlos á la desercion, no podia ser juzgado por la Comandancia militar, porque las leyes vigentes ordenan, que del delito de auxiliar á la desercion conozca el Juez natural del presunto reo, y del de sedicion, conozcan los tribunales federales.

Que era en consecuencia, manifiesta la incompetencia de la justicia militar para instruir al quejoso un proceso por los repetidos delitos.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declaró que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los quejosos.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema

Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 3 de 1874.—*Enrique Landa.*

## JUICIO

*Seguido ante el Juzgado de Distrito del Norte de Tamaulipas, con motivo del denuncia que los CC. Ramon Villareal Hinojosa y José María Aguilar, hicieron de que mil cien barras ó marquetas plomo que habian llegado á Camargo remitidas por el Director de "Minas Viejas" jurisdiccion de Vallecillo, contenian mucha plata que iba á exportarse sin pagar los correspondientes derechos.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

II. Matamoros, Agosto 15 de 1873.—Visto el presente juicio, del que aparece por el acta de fojas una, levantada por el C. Agente fiscal del Gobierno del Estado en Camargo el 6 de Julio último, que los CC. Ramon Villareal Hinojosa y José María Aguilar, le denuncian la llegada á esa Ciudad, de un mil cien barras de plomo cubiertas con su guía, procedentes de "Minas Viejas" de Vallecillo, reputándolo caso de contrabando por que iba á exportarse como plomo libre de derechos, cuando tenía ligada una considerable porcion de plata, con lo cual se defraudaban al Erario los que esta debe pagar. Vistos: la aprehension que aquel empleado mandó hacer del expresado metal, y su reconocimiento por el mecánico del lugar C. Eduardo Larios, incompleto por no producir el preciso resultado de la

operacion; la copia constante á fojas 3 de la guía que ampara el cargamento; el parte que dió al C. Administrador de aquella Aduana, calificando el hecho como de exportacion clandestina y fraudulenta, fojas 4; el telégrama en que esa oficina le comunica el suceso á la de aquí, pidiéndole instrucciones; la contestacion relativa mandando detener el plomo y avisando que salia el ensayador para su reconocimiento; el expediente de aquella Aduana disponiendo que se hiciera el ensayo, citando al interesado para que eligiese la vía en que habia de conocerse del negocio, y su respuesta decidiéndose por la judicial; el "Memorandum" del perito C. José O. Huintrado que se agrega á fojas 9, declarando que despues de cinco ensayos, las un mil cien barras de plomo dan treseientos quince marcos diez céntimos de plata á toda ley, los que en dinero hacen dos mil quinientos noventa y nueve pesos cincuenta y siete centavos; la consignacion del negocio á este Tribunal; la ratificacion del parte del Agente fiscal; el auto que contiene la citacion para proceder á la audiencia verbal requerida por la ley, y en ella, la repulsion del poder con que el C. Jesus Martinez pretendia representar al Director y Compañia del mineral remitente, por no venir en forma; la caucion de *grato el rato* que otorgó acompañando la escritura competente de fojas 25, quedando así asegurada su personería; la ratificacion que de su citado "Memorandum" hizo el ensayador, y los apuntes que exhibió y corren agregados á fojas 28, caplicando á fojas 33 vuelta, que la excedencia de plata en numenario es de seiscientos cuarenta pesos; el artículo de sobreseimiento promovido por el reo; el auto en que se denegó la demanda puesta por el Ministerio público, pidiendo que conforme á la pauta de comisos se declare caída en esta pena la excedencia que sobre la permitida por las leyes de minería de liga al plomo, aparece traer el aprehendido, como caso de suplantacion; la respuesta del demandado queriendo que se le ab-